

**CAUSA ROL N° : C-300-2021**  
**MATERIA : FACTURA, NOTIFICACIÓN DE**  
**CÓDIGO : N15A**  
**DEMANDANTE : FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A.**  
**DEMANDADO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**  
**INICIO : 15/02/2021**

Arica, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

**Visto:**

Comparece don **Eduardo Marchi Fernández**, abogado, en representación convencional y como mandatario judicial de **Finameris Servicios Financieros S.A.**, persona jurídica de derecho privado y del giro de su denominación, representada legalmente por don **Leonardo Percival Whittle Molfino**, ingeniero comercial, y don **Carlos Cristián Valdés Bowen**, ingeniero comercial, con domicilio para estos efectos en Avda. Ingeniero Raúl Pey Casado N° 3165, Edificio Orotambo, departamento N° 41, de la comuna de Arica; quien deduce demanda ejecutiva por la suma de **\$189.999.999**, más intereses y reajustes que correspondan, en contra de la **Ilustre Municipalidad de Arica**, representada legalmente por su alcalde don Gerardo Alfredo Espíndola Rojas, corporación autónoma de derecho público, ambos con domicilio en calle Sotomayor N° 415, de la comuna de Arica.

Fundando su demanda, indica que su mandante es dueña de la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de 2020, por la suma de \$189.999.999, cuyo cuadruplicado cobro ejecutivo consta en autos, la cual no ha sido pagada hasta la fecha.

Explica que dicha factura fue emitida por Espacios Verdes y Deportivos SpA, rol único tributario N° 76.515.989-K, a la I. Municipalidad de Arica, documento que fue irrevocablemente aceptado en los términos establecidos por el artículo 3° de la Ley N° 19.983, por no haber sido devuelta ni reclamado su contenido dentro del plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción. Añade



que según consta en el referido instrumento, el emisor lo cedió a su representada, de acuerdo con el artículo 7° del mismo texto legal citado, negocio jurídico que fue anotado e inscrito con fecha 8 de julio de 2020 en el Registro Público Electrónico de Transferencias de Créditos.

De otro lado, señala que la factura fue notificada judicialmente con fecha 25 de febrero de 2021, según consta en los autos preparatorios de la vía ejecutiva, sin que la contraria compareciere dentro de plazo legal a oponer las excepciones que consulta el artículo 5° de la Ley N° 19.983, cumpliéndose en la especie con las solemnidades del artículo 434 N° 7 del Código de Procedimiento Civil. En línea con lo anterior, estima que la obligación es líquida, actualmente exigible, consta de un título ejecutivo perfecto y la acción para su cobro no está prescrita, razón por la cual están sentadas las bases para la interposición de la demanda ejecutiva.

Luego de las citas legales pertinentes, termina solicitando tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de la I. Municipalidad de Arica, representada por su alcalde don Gerardo Alfredo Espíndola Rojas, por la suma de \$189.999.999, más intereses y reajustes que correspondan, y ordenar se siga adelante la ejecución hasta hacerse a su mandante entero y completo pago de todo lo que se adeuda, con expresa condena en costas.

A folio 2, por resolución de fecha 18 de marzo de 2021, se tuvo por presentada la demanda y se ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo, siendo el ejecutado notificado de la demanda con fecha 1 de abril de 2021, y requerido de pago el día 5 de abril de 2021.

A folio 9, por presentación de fecha 9 de abril de 2021, comparece don **José Fuentes Díaz**, abogado, en representación de la ejecutada **Ilustre Municipalidad de Arica**, corporación autónoma de derecho público, ambos con domicilio para estos efectos en calle Sotomayor N° 415, segundo piso, Oficina de Asesoría Jurídica, de la comuna de Arica, quien opone la excepción del numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado.



Funda su defensa en los argumentos que a continuación se sintetizan.

#### I. Antecedentes de contexto.

Explica que, con fecha 26 de septiembre de 2019, se suscribió entre su representada y la empresa Espacios Verdes y Deportivos SpA o EVD SpA, el contrato definitivo de la propuesta pública N° 63/2018, denominada “Servicio de Mantención y Mejoramiento de Áreas Verdes en la comuna de Arica”, cuya vigencia sería de 4 años, prorrogable por una sola vez, contados desde el 1 de noviembre de 2019, por un valor de \$190.000.000 mensuales.

Indica que, producto de los graves y frecuentes incumplimientos en que incurrió la empresa, se puso término anticipado al contrato mediante Decreto Alcaldicio N° 4813, de fecha 27 de julio de 2020. El detalle de aquellos incumplimientos es el siguiente: i) Multa por labores no realizadas en el mes de febrero de 2020, \$13.675.998; ii) Multa por atraso en la documentación requerida, \$49.364.560; iii) Multas por reposición de especies, \$85.632.400; y iv) Interrupción e intervención de superficie correspondiente al mes de junio de 2020, \$2.649.497.

Expresa que la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de 2020, emitida por EDV SpA, corresponde a los servicios brindados en el mes de junio de 2020, los cuales devengaron las multas y descuentos precedentemente detallados.

#### II. Excepción a la ejecución.

Señala que opone a la ejecución la excepción del artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en cuatro capítulos de impugnación, a saber:

a) La factura fue cedida en factoring antes del cumplimiento del plazo de 8 días para tenerse por irrevocablemente aceptada.

Estima que, producto del señalado defecto, al momento de efectuarse la cesión la factura no gozaba del carácter de cedible en los términos de los artículos 1° y 3° de la Ley N° 19.983. Concluye, entonces, que no era posible concebir que la copia de la factura, aparejada al proceso fuera, un título-valor del que emanara un crédito que a su vez fuera correlativo, a la fecha de la cesión, a una obligación



irrevocablemente aceptada por el deudor, lo que permitiría entender en este caso la procedencia de la excepción formulada por la falta de exigibilidad del título de marras.

b) La inexistencia del recibo de conformidad de los servicios que exige el artículo 2° quater de la Ley N° 19.983 en este caso, atendido el carácter de órgano público de la parte ejecutada, impide que se pueda ceder en factoring la factura en cuestión.

Con base en la norma referida, concluye que la falta de recibo de los servicios constituía un impedimento para que el emisor de la factura pudiera cederla, tal como lo ha advertido la Contraloría General de la República.

c) Inoponibilidad de la cesión de la Factura N° 349, llevada a cabo entre EVD SpA y Finameris Servicios Financieros S.A., respecto de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Estimada que como la Factura N° 349 fue cedida antes del plazo legal, no resulta oponible dicha cesión respecto de su parte, porque el ejecutante y el cedente no cumplieron con uno de los requisitos que la ley exige para la transferencia de este tipo especial de instrumento crediticio, y por lo tanto, para que sea un título ejecutivo perfecto.

d) Falta de exigibilidad de la obligación de pago de la Factura N° 349 por la existencia de multas pendientes aplicables a la prestadora de los servicios que la originaron.

Sostiene que producto de la existencia de multas por incumplimiento de obligaciones ascendentes a \$148.672.958, a lo cual se adiciona la suma de \$2.649.497 por interrupciones e intervenciones en las superficies de las áreas verdes que debía mantener, todo según el detalle del primer acápite de su escrito, y con base en el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886, no resulta exigible en estos autos el cobro total de los servicios, sino únicamente el saldo correspondiente que resultare luego de descontar las cifras señaladas.



Luego de las citas legales correspondientes, termina solicitando tener por formulada excepción a la ejecución, declararla admisible, acogerla, y, en definitiva, negar lugar a la ejecución, en todas sus partes, con costas.

A folio 11, por resolución de fecha 13 de abril de 2021, se tuvo por opuesta la excepción y se confirió traslado a la ejecutante.

A folio 13, mediante presentación de fecha 17 de abril de 2021, comparece don **Eduardo Marchi Fernández**, abogado, en representación de la ejecutante, quien evacúa el traslado conferido, solicitando el rechazo de la excepción opuesta, con costas.

Fundando su defensa, en síntesis, y luego de resumir los principales argumentos vertidos por la ejecutada en su escrito de oposición, sostiene que la excepción no resulta procedente porque el documento fundante de la presente ejecución satisface todos y cada uno de los requisitos que la ley exige para que tenga mérito ejecutivo. En efecto, agrega, la factura en cobro no fue devuelta al momento de la entrega y tampoco fue reclamado su contenido dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, ésta se debe tener por irrevocablemente aceptada.

Respecto de la cesión de la factura, indica que fue anotada e inscrita en el Registro Público Electrónico de Transferencias de Créditos, con fecha 8 de julio de 2020.

De otro lado, explica que la factura fue notificada judicialmente a la demandada con fecha 25 de febrero de 2021, según consta en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, sin que dentro de plazo legal opusiere las excepciones del artículo 5°, letra d), de la Ley N° 19.983, por manera que se cumplen todos los requisitos para dar curso a la ejecución.

En lo que hace a los demás argumentos planteados por la ejecutada, considera que no resultan procedentes en derecho, por las siguientes razones: i) porque la demandada equivoca la interpretación de la Ley N° 19.983 al plantear que la exigibilidad de la obligación contenida en la factura se relacionaría con el plazo contemplado en el artículo 3° de dicho cuerpo legal, en circunstancias de



que ello se vincula con su recepción, según aparece del artículo 2° del mismo cuerpo normativo citado; ii) porque la Ley N° 19.983 no contempla una sanción de inoponibilidad para el caso de que la cesión de la factura se realice antes de transcurrido el plazo de 8 días contemplado por su artículo 3°, considerándose válidas las cesiones, conforme con el inciso quinto de su artículo 4°, efectuadas antes de dicho lapso, si con posterioridad a la cesión se otorgó el recibo correspondiente o venció el término referido sin que se hubiere reclamado en contra del contenido de la factura, o de la falta o entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, cuyo es el caso de autos; iii) porque la exigencia contemplada por el artículo 2° quater de la ley del ramo, dado lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la Ley N° 21.131, no resulta aplicable en la especie, toda vez que dicha disposición legal aún no entra en vigencia respecto de las municipalidades en lo que refiere a las facturas emitidas por las empresas que allí se indican; y iv) porque los argumentos relativos a los incumplimientos en que pudo o no haber incurrido la cedente respecto de la deudora cedida, dado lo dispuesto en el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 19.983, no son oponibles al cesionario, en este caso a la ejecutante.

Termina solicitando tener por contestado el traslado conferido respecto de la excepción opuesta por la demandada y, en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, desestimarla en definitiva, en todas sus partes, con costas.

A folio 14, por resolución de fecha 19 de abril de 2021, fue declarada admisible la excepción y se la recibió a prueba.

A folio 26, por resolución de fecha 22 de diciembre de 2021, se citó a las partes para oír sentencia.

#### **Con lo relacionado y considerando:**

**Primero:** Que, comparece don **Eduardo Marchi Fernández**, abogado, en representación convencional y como mandatario judicial de **Finameris Servicios Financieros S.A.**, persona jurídica de derecho privado y del giro de su denominación, representada legalmente por don **Leonardo Percival Whittle**



**Molfino**, ingeniero comercial, y don **Carlos Cristián Valdés Bowen**, ingeniero comercial; quien deduce demanda ejecutiva por la suma de **\$189.999.999**, más intereses y reajustes que correspondan, en contra de la **Ilustre Municipalidad de Arica**, representada legalmente por su alcalde don Gerardo Alfredo Espíndola Rojas, conforme con los argumentos de hecho y de derecho señalados en la expositivo de esta sentencia.

**Segundo:** Que, a folio 9, comparece don **José Fuentes Díaz**, abogado, en representación de la ejecutada **Ilustre Municipalidad de Arica**, corporación autónoma de derecho público, quien opone la excepción del numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, conforme con los argumentos de hecho y de derecho indicados en lo expositivo de esta fallo.

A folio 11, se tuvo por opuesta la excepción y se confirió traslado a la ejecutante.

**Tercero:** Que, a folio 13 comparece don **Eduardo Marchi Fernández**, abogado, en representación la ejecutante, quien solicita el rechazo de la excepción opuesta, con costas, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho relatados en lo expositivo de este fallo.

**Cuarto:** Que, a folio 14, por resolución de fecha 19 de abril de 2021, se declaró admisible la excepción opuesta y se recibió la causa a prueba.

**Quinto:** Que, dentro del término probatorio, las partes no rindieron prueba.

**Sexto:** Que, son hechos no controvertidos por las partes, los siguientes:

1. Que la empresa Espacios Verdes y Deportivos SpA, emitió la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de 2020;

2. Que el referido documento fue recibido por la demandada Ilustre Municipalidad de Arica, sin que fuera objetado;

3. Que, antes del vencimiento del plazo para impugnar la factura, ésta fue cedida por su emisor a la empresa Finameris Servicios Financieros S.A., cesión



que fue anotada e inscrita en el registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas, con fecha 8 de julio de 2020;

4. Que la factura de que se viene tratando no fue pagada por la I. Municipalidad de Arica, en su oportunidad;

5. Que con fecha 15 de febrero de 2021, a folio 1, del cuaderno separado correspondiente, consta que la parte ejecutante impetró una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, consistente en la notificación legal de la factura de autos, la que fue acogida a trámite por resolución de fecha 18 de febrero de 2021, que corre a folio 3 del mismo cuaderno;

6. Que la notificación de la gestión preparatoria fue practicada con fecha 25 de febrero de 2021, según consta del estampado del ministro de fe actuante, la que corre agregada a folio 8 del cuaderno respectivo; y

7. Que el deudor no formuló ninguna alegación en relación con la factura que le fue notificada, según consta en la certificación de la Secretaria Subrogante del Tribunal, de fecha 8 de marzo de 2021, que rola a folio 12 del cuaderno de gestión preparatoria.

**Séptimo:** Que, en su primer capítulo de impugnación, la ejecutada sostiene que la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de 2020, no pudo ser cedida por su emisor a Finameris Servicios Financieros S.A., por cuanto no había transcurrido el plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción, que el artículo 3° de la Ley N° 19.983 establece para que ese documento pueda tenerse como irrevocablemente aceptado y dar cuenta de una obligación exigible.

**Octavo:** Que, según apunta la doctrina, *“una obligación es exigible cuando no está sujeta a ninguna modalidad que suspenda su nacimiento o ejercicio, o sea, cuando no está sujeta a condición, plazo o modo”* (Espinosa Fuentes, Raúl, *Manual de procedimiento civil. El juicio ejecutivo*, 11ª edic., Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 67).

En el caso de autos, un somero análisis de la factura permite concluir que la obligación en ella consignada es pura y simple, cuestión de suyo relevante, porque





conforme con lo dispuesto en el inciso final del artículo 2° de la Ley N° 19.983, “*En ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible de alguno de los plazos señalados, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días siguientes a la recepción*”. Conforme con lo anterior, es posible concluir, tal como lo plantea el ejecutante, que la obligación de pago de la factura, esto es su exigibilidad, no se vincula con el transcurso del plazo de 8 días que el artículo 3°, numeral 2, de la Ley N° 19.983, concede para reclamar en contra del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, siendo relevante, en cambio, la **recepción** de ese documento, pues quien paga con antelación al vencimiento del referido término, estará cumpliendo con una obligación civil.

Ahora bien, una factura que es cedible puede convertirse en un título ejecutivo si se ajusta al procedimiento establecido en el artículo 5° de la Ley n.° 19.983. A tal efecto, la norma exige que se trate de una factura completa, vale decir, con constancia de recepción de los bienes o prestación de los servicios o con la guía de despacho anexa que cumpla la misma finalidad y que, en primer término, no haya sido reclamada (letra a). En este sentido, no debe olvidarse que una vez recepcionada la factura, el deudor tiene, al igual que en el artículo 160 del Código de Comercio, 8 días corridos para objetarla y devolverla, siendo dos las causales de objeción, conforme lo establece el artículo 3° de la Ley N° 19.983: **a)** Objeción del contenido mismo de la factura; y **b)** Objeción por la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio. Como apunta la doctrina, “*Cabe aquí la falta de entrega física o de la prestación del servicio, pero también la objeción por falta de entrega oportuna, por falta de entrega en la condición o calidad convenida o presunta conforme los principios contractuales y de la buena fe, etc., descritos en el art. 1546 del Código Civil, esto es, la falta de entrega o la falta de entrega íntegra y oportuna*” (Puga Vial, Juan, *Documentos negociables en el derecho chileno y comparado. La letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura cedible*, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2018, p. 665). Y agrega el mismo autor: “*La factura debe ser objetada, no basta con devolverla; el rechazo debe ser fundado en alguna de las dos causales y si es por*



la forma debe indicar qué errores contiene la factura, pues no tiene sentido un rechazo que genéricamente acuse de errores en el contenido" (Puga Vial, Juan, en la misma obra citada). La consecuencia jurídica de no objetarse la factura en la forma y plazo señalados, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N° 19.983), es que se tendrá por **irrevocablemente aceptada**.

Adicionalmente la ley exige: **1)** Que su pago sea actualmente exigible y la acción para su cobro no esté prescrita (art. 5° letra b), precisando el inciso final del art. 10 que el plazo de prescripción de la acción ejecutiva, para el cobro del crédito consignado en la copia de la factura, en contra del deudor de la misma, es de un año, contado desde su vencimiento; y **2)** Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquel no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guías (s) de despacho respectivas, del recibido de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial (art. 5° letras c y d).

Ahora bien, volviendo al carácter de irrevocablemente aceptada de la factura, cabe señalar que éste no es un requisito indispensable para que la copia de dicho documento pueda ser cedida. En efecto, según establece el artículo 4° de la ley del ramo, además de haber sido emitida de conformidad a las normas que rijan la emisión de la factura original, incluyendo en su cuerpo en forma destacada la mención "cedible" (letra a), es necesario que en la misma copia conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado (letra b), disponiendo el inciso quinto de la disposición legal citada: *"El recibo a que se refiere el literal b) del inciso primero deberá efectuarse dentro de los ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura. En caso que **el recibo no haya sido efectuado** en el plazo señalado y tampoco haya existido reclamo en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio mediante alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 3°, **se presumirá que las mercaderías han sido entregadas o el servicio ha sido prestado**. En este último caso, **la factura quedará apta para su cesión**, sin necesidad de que el recibo conste en la misma"*.



A su turno, el inciso sexto del mismo artículo 4°, establece: “*En caso de otorgarse el recibo a que se refiere el literal b) del inciso primero o haber transcurrido el plazo indicado en el inciso precedente, sin que haya existido reclamo en contra del contenido de la factura o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio mediante alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 3°, se presumirá de derecho que son válidas las cesiones de que hubiere sido objeto la factura a la fecha del recibo o del vencimiento del plazo, siempre que ésta cumpliera, al momento de la cesión, con lo indicado en el literal a) del inciso primero*”.

Como se comprende, **la ley no exige como requisito para la cesión de la copia de la factura el que ésta haya sido irrevocablemente aceptada**; por el contrario, presume de derecho la validez de aquellas cesiones efectuadas con anterioridad a dicho carácter, entre otras hipótesis, si, tal como ocurre en el presente caso, transcorre el plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción sin que se hubiere reclamado en contra del contenido de la factura o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, razón por la cual este primer capítulo de impugnación será desestimado.

**Noveno:** Que, por la estrecha vinculación que posee el tercer capítulo de impugnación (letra c) con el examinado en el motivo anterior, corresponde ahora pronunciarse en torno a la inoponibilidad de la cesión de la factura que aduce la ejecutada.

En este contexto, cabe recordar que la inoponibilidad es una “*sanción civil que impide que se haga valer ante terceros un derecho nacido ya sea de la celebración de un negocio jurídico, ya sea de la nulidad del mismo o de otra causal de terminación anormal de un negocio jurídico, como la resolución o la revocación*” (López Santa María, Jorge, *Los contratos*, Edit. Thomson Reuters, 5ª edic., Santiago, 2010, p. 317); y no afectando a la cesión de la factura ningún vicio de nulidad u otro semejante, sus efectos son plenamente oponibles a la Ilustre Municipalidad de Arica, en tanto tercero a cuyo respecto el citado artículo 4°,



inciso quinto, de la Ley N° 19.983, presume de derecho su validez, razón por la cual este otro extremo de la excepción en análisis será desestimado también.

**Décimo:** Que, el segundo capítulo de impugnación (letra b) que sustenta la oposición en examen, plantea que el emisor de la factura no podía ceder la factura atendida la falta de recepción de los servicios exigida por el artículo 2° quater de la Ley N° 19.983.

Para desestimar esta defensa, basta con recordar que el artículo 2° quater que la Ley N° 21.131, de fecha 16 de enero de 2019, incorpora a la Ley N° 19.983, entre otras modificaciones que buscan asegurar el pago oportuno de las facturas emitidas al Estado por empresas de menor tamaño proveedoras de bienes y servicios, no resulta aplicable en la especie, por cuanto según lo dispone el artículo primero transitorio, inciso tercero, de aquella ley modificatoria: *“Respecto... de las **municipalidades**, las normas contenidas en los artículos 2° bis y siguientes que se incorporan en la ley N° 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416, recibidas **a contar del primer día del vigésimo noveno mes de publicada la ley en el Diario Oficial**. Luego de transcurridos doce meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas, sin distinción de emisor”*.

Conforme con lo anterior, la entrada en vigencia del referido artículo 2° quater se produjo a partir del día 1 de junio de 2021 para las empresas de menor tamaño, y se producirá a contar del día 1 de junio de 2022 para las facturas emitidas sin distinción de emisor. En el caso de autos, empero, la Factura N° 349 fue emitida con fecha 1 de julio de 2020, aplicándose a su respecto íntegramente las normas generales de la Ley N° 19.983 ya analizadas, en cuyo contexto la falta de recibo de los servicios que aduce la ejecutada deviene irrelevante, motivos por los cuales este extremo de la excepción opuesta será igualmente desestimado.

**Undécimo:** Que, el último capítulo de la excepción en análisis (letra d), sostiene que la obligación contenida en la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de



2020, no es exigible por la existencia de multas pendientes aplicables a la prestadora de los servicios que la originaron.

Despejado como está el carácter de irrevocablemente aceptada de la factura en cobro, así como la validez y oponibilidad, frente a la I. Municipalidad de Arica, de la cesión de dicho documento efectuada por la empresa Espacios Verdes y Deportivos SpA a Finameris Servicios Financieros S.A., la norma aplicable en la especie es el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 19.983, a cuyo tenor: “Serán **inoponibles** a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor”.

Por consiguiente, la ejecutada se encuentra legalmente imposibilitada de oponer a la cesionaria Finameris Servicios Financieros S.A., los eventuales incumplimientos vinculados con el negocio jurídico causal que sirvió de antecedente a la emisión de la factura en cobro, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que procedan en contra del emisor de dicho instrumento, Espacios Verdes y Deportivos SpA, razón que autoriza para rechazar este último capítulo que sustenta la excepción opuesta.

Finalmente, en concepto de este sentenciador, la conclusión anterior en nada se ve alterada por lo que dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886, a cuyo tenor, “Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes”. En efecto, la disposición se refiere al cumplimiento de los contratos de factoring suscritos por sus contratistas, determinando su cumplimiento, salvo que existan obligaciones o multas pendientes; empero, nada dice esa norma respecto de los requisitos para que la factura correspondiente tenga mérito ejecutivo o en cuanto al procedimiento para obtener su cobro compulsivo, cuestión que, al amparo del propio artículo 1° reglamentario, propicia la aplicación del



Derecho Privado del cual forma parte la Ley n.º 19.983. Concluir de otro modo, importa atribuir inmunidad absoluta a la Administración del Estado, particularmente a las Municipalidades, frente a la aplicación de los procedimientos de cobro de los créditos que el ordenamiento jurídico franquea a los particulares, privilegio ciertamente inadmisibles a la luz de lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de la República.

**Duodécimo:** Que, en suma, la copia cedida de la Factura N° 349, de fecha 1 de julio de 2020, cumple con todos los requisitos que particularmente el artículo 5º de la Ley N° 19.983 exige para otorgarle mérito ejecutivo a dicho título, dando cuenta de una obligación líquida, actualmente exigible y cuya acción no se encuentra prescrita, por lo que, como ya quedó establecido, la excepción opuesta debe ser rechazada.

**Decimotercero:** Que, por haber resultado totalmente vencida, la ejecutada será condenada en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 434, 464, 466, 470 y 471 del Código de Procedimiento Civil; 1698, y demás pertinentes del Código Civil; 160 del Código de Comercio; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y demás pertinentes de la Ley N° 19.983, se declara:

**I.** Que **se rechaza** la excepción de falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, opuesta por don **José Fuentes Díaz**, abogado, en representación de la **Ilustre Municipalidad de Arica**.

**II.** Que se condena en costas a la parte vencida.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Notifíquese por cédula

**Rol N° C-300-2021**



Dictada por don **Jaime Andrés González Orrico**, Secretario Titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, actuando en carácter de Juez Suplente. Autoriza don Patricio Geerds Parra, Secretario Subrogante.

CERTIFICO: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 inciso final del Código de Procedimiento Civil. Arica, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

